

## **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No 020

**Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez**

<b>Proceso</b>	: ORDINARIO
<b>Demandante</b>	: CARLOS ENRIQUE GIRALDO MARENCO
<b>Demandados</b>	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TÉCNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. – C.I. TECBACO S.A. -, COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. – C.I. UNIBAN S.A.-
<b>Radicado</b>	: 05001 31 05 010 2019 00070 01
<b>Instancia</b>	: Segunda
<b>Temas y Subtemas</b>	: Apelación de Auto –Excepción previa de cláusula compromisoria -.
<b>DECISIÓN</b>	: Confirma decisión de Primera Instancia

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020 *“...Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica...”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## **ANTECEDENTES**

### **Pretensiones:**

Se solicita se ordene el reconocimiento y pago de pensión de vejez, mesadas adicionales, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación; pago de cotizaciones en mora y título pensional; costas procesales, condenas ulta y extra petita.

### **Hechos relevantes de la demanda:**

Se afirma que el señor Giraldo Marengo laboró al servicio de C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A., desde el 3 de julio de 1984 hasta el 29 de julio de 1993, sin embargo, el empleador solo efectuó cotizaciones desde el 31 de octubre de 1986; con C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A. laboró desde el 28 de febrero de 1978 hasta el 31 de julio de 1983 y según la historia laboral, este tiempo no fue cotizado; expone que cuenta con 970 semanas cotizadas, que sumadas a 119,73 y 279 dejadas de cotizar por las codemandadas, respectivamente, alcanzaría 1368,73, superando la densidad exigida en la Ley.

### **Excepciones previas:**

Al dar respuesta a la demanda, el apoderado de **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL UNIÓN DE BANANEROS DE URABA S.A. – C.I. UNIBAN S.A.-**, formulando la excepción previa denominada cláusula compromisoria, afirmando que el demandante estuvo vinculado con la compañía, entre el 3 de julio de 1984 y el 29 de julio de 1993 en virtud de un contrato de trabajo; el día 1º de octubre de 1984, se suscribió un pacto colectivo con los trabajadores no sindicalizados, entre ellos el demandante, donde se acordó que ante cualquier controversia o diferencia en razón de la interpretación, aplicación, vigencia,

cumplimiento del pacto, del contrato de trabajo y de los reglamentos internos de trabajo y de higiene y seguridad de la empresa, sanciones disciplinarias, despidos, reconocimiento o pago de indemnizaciones, prestaciones, derechos o beneficios previstos en la Ley laboral, el trabajador debía presentar una reclamación escrita a la empresa y en caso de negación, el asunto sería sometido exclusivamente al fallo de árbitros, Tribunal que funcionaría en Medellín o Apartadó, según el caso y fallaría en derecho. Agrega que para la vigencia 1992-1994, nuevamente se suscribió un pacto colectivo en similares términos. Sostiene que la demanda está orientada a que se declare el incumplimiento de las obligaciones legales exigibles al empleador, tema relacionado con la interpretación, aplicación y ejecución del contrato de trabajo, conflicto que se acordó someter a un Tribunal de Arbitramento, por lo que se debe declarar la falta de competencia del Juez Laboral y en consecuencia, la terminación anticipada del proceso.

#### **Decisión de la excepción previa:**

En la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, realizada el 1º de diciembre de 2020, **el Juzgado declaró no probada la excepción previa denominada cláusula compromisoria**; sin condena en Costas.

#### **Recurso de Apelación apoderada C.I. UNIBAN S.A.:**

Sostiene que en el año 1984, cuando el demandante se vinculó con C.I. UNIBAN S.A., se adhirió en forma autónoma al pacto colectivo con su empleador; si bien la cláusula compromisoria no fue transcrita en el contrato de trabajo, si consta en el pacto colectivo; el hecho de someter las controversias ante un Tribunal de Arbitramento no indica la renuncia a derechos ciertos e indiscutibles, como los del presente litigio; no fue una cláusula impuesta, el demandante decidió firmarla de manera libre y voluntaria, inclusive en una segunda oportunidad se adhirió; solicita se resuelva a favor la excepción previa propuesta.

### **Alegatos de conclusión:**

La apoderada de **COLPENSIONES** expuso que se atiene a lo decidido por este Tribunal, teniendo en cuenta que no apeló lo resuelto en Primera Instancia y que la excepción surge de un pacto previo entre el demandante y C.I. UNIBAN S.A.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

### **Conflicto Jurídico:**

**El conflicto jurídico a dirimir radica en verificar si hay lugar a revocar la decisión de Primera Instancia, analizándose si la cláusula compromisoria contenida en el Pacto Colectivo suscrito por las partes, vigente para los periodos 1984-1986 y 1992-1994, en la que se acordó acudir a un Tribunal de Arbitramento, entre otros, para dirimir conflictos referentes al reconocimiento de prestaciones y beneficios previstos en la Ley laboral; genera como consecuencia jurídica la falta de competencia del Juez Laboral, para conocer el asunto planteado.**

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, confirmar la decisión de Primera Instancia, por las siguientes razones:**

Mediante la cláusula compromisoria, las partes en un contrato acuerdan someter las eventuales diferencias, a la decisión de un Tribunal Arbitral. En la Jurisdicción Ordinaria en su Especialidad Laboral, **el artículo 130 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social**, consagra que el empleador y el trabajador, pueden estipular que las controversias surgidas por razón de sus relaciones de trabajo, sean dirimidas por arbitradores; a su vez, **el artículo 131 ibídem, señala que la cláusula compromisoria debe constar en convención o pacto colectivo para que tenga validez.**

Por su parte, la H. Corte Constitucional en **Sentencia C-878 del 23 de agosto de 2005 M.P. doctor Alfredo Beltrán Sierra**, al analizar la Constitucionalidad de la expresión *“La cláusula compromisoria sólo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo”*, precisó que dada la trascendencia de la decisión del trabajador al renunciar a la justicia ordinaria para la solución de sus conflictos, nace para el Estado, a través del Legislador, la obligación de adoptar las precauciones que estime convenientes; consideró que se equilibraban las partes bajo la presunción de que si la cláusula compromisoria consta en convención o pacto colectivo, quiere decir que tal decisión fue producto de una amplia discusión previa, con la participación del sindicato o los representantes de los trabajadores y por tanto, fue adoptada libre de presiones.

A su vez, en **Sentencia C-330 de 2000 M.P. doctor Carlos Gaviria Díaz** (Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 130 a 142 del decreto 2158 de 1948 –Código Procesal del Trabajo–), señaló que la equiparación funcional entre los funcionarios del Estado y ciertos ciudadanos, temporalmente investidos de poder jurisdiccional, no puede extenderse a todas las materias, así haya sido voluntariamente designado por las partes enfrentadas; pues, **principios como el de la seguridad jurídica hacen necesario que ciertos asuntos sean ventilados a través de la jurisdicción ordinaria**, cuando se relacionan con la **garantía de**

**derechos constitucionales fundamentales**, tales como los **derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores**.

Indicó también que, **el acuerdo de voluntades del que surge la jurisdicción arbitral, no puede entorpecer el acceso a la justicia, el desconocimiento de derechos irrenunciables de alguna de las partes, o la violación de principios esenciales del orden social como la seguridad jurídica o la igualdad de oportunidades**; así mismo, que **los acuerdos entre particulares que restrinjan definitivamente el derecho de acceso a la justicia están proscritos constitucionalmente**, ya sea que prohíban de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria o por medio de la imposición de sanciones o cargas desproporcionadas e irrazonables que imposibilitan el acceso a la jurisdicción y que por tanto, **carece de licitud todo pacto contra la ley**, pues “...*los contratantes no pueden comprometerse a la forzada renuncia del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia...*”; expuso que **toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia** y que los estímulos legales al uso de los mecanismos alternativos de solución de los conflictos, **no pueden llegar al extremo de bloquear o afectar de manera desproporcionada la posibilidad de una persona de llevar su controversia ante los Jueces**.

Refirió que **las disposiciones legales sobre las que se funda la competencia de los tribunales arbitrales voluntarios en materia laboral, están sometidas, en su aplicación e interpretación, a los límites iusfundamentales establecidos por la Constitución y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte**; debiéndose garantizar el debido proceso y al acceso a la administración de justicia, igualdad de oportunidades para los trabajadores; la remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; la estabilidad en el empleo; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; la atribución de facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos; la aplicación de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales de derecho; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, entre otros.

**En el asunto bajo estudio**, consideró el Juez de Primera Instancia, en términos generales, que el conflicto aquí planteado no deviene de la aplicación, interpretación o cobertura de las normas del Pacto Colectivo suscrito; concluyó que **no resulta admisible sustituir la Jurisdicción Ordinaria Laboral por el Tribunal de Arbitramento, por cuanto se estaría renunciando al derecho a la jurisdicción**, que tiene prelación cuando se trata de conflictos jurídicos relacionados con el reconocimiento de derechos enmarcados en la legislación laboral, que es de orden social, jurisdicción que es indelegable e inaplazable.

Por su parte, la apoderada de C.I. UNIBAN S.A., sostiene que el demandante adhirió en forma autónoma al suscribir el pacto colectivo con su empleador, de manera libre y voluntaria, sin que ello implique la renuncia a derechos ciertos e indiscutibles, como los del presente litigio.

No está en discusión la existencia del Pacto Colectivo suscrito entre las partes, contenido de la cláusula compromisoria invocada por C.I. UNIBAN S.A., como fundamento para alegar la falta de competencia del Juez Laboral; mecanismo que, en términos de la H. Corte Constitucional, supone que fue producto de una amplia discusión previa, con la participación del sindicato o los representantes de los trabajadores y por tanto, fue adoptado libre de presiones, tal como lo afirma la recurrente; sin embargo, **la habilitación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como el Tribunal de Arbitramento y el acuerdo voluntario de las partes de acudir a el, no puede convertirse en una barrera que impida el acceso a la Administración de Justicia, además, el asunto planteado está relacionado con el derecho a la seguridad social**, tratándose de derechos fundamentales mínimos e irrenunciables, consagrados en la Constitución Política.

Y conforme a la jurisprudencia citada de la H. Corte Constitucional, cuando el conflicto está relacionado con la garantía de derechos constitucionales fundamentales, mínimos e irrenunciables de los trabajadores, se hace necesario que el asunto deba ser **ventilado a través de la jurisdicción ordinaria**, al estar de por medio principios como la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral que la decisión adoptada por el *a quo*, atiende los lineamientos señalados por la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional antes citada, en garantía de los derechos fundamentales mínimos e irrenunciables consagrados en la Constitución Política, a favor de los trabajadores.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** la decisión de Primera Instancia.

### **COSTAS:**

**Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia** a cargo de **C.I. UNIBAN S.A.**, al no haber prosperado el recurso de Apelación formulado, fijándose como agencias en derecho un (1) SMLMV (\$908.526) en favor de la parte demandante, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**


**PRIMERO:** Se **CONFIRMA** el **Auto** de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa, de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.



**SEGUNDO:** Se **CONDENA** en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de la codemandada **C.I. UNIBAN S.A.**, fijándose como agencias en derecho un (1) SMLMV (\$908.526) en favor de la parte demandante **CARLOS ENRIQUE GIRALDO MARENCO**; según lo explicado en la parte motiva.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9º del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

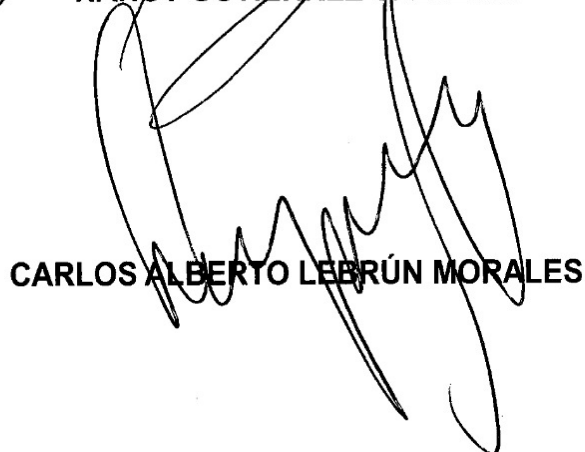
**Los Magistrados,**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**



**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por Estados No. **65** del **20 de abril de 2021**.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>